PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
XXV LEGISLATURA

COMISIÓN DE LA DIVERSIDAD

DICTAMEN NÚMERO 02

EN LO GENERAL: SE APRUEBA LA REFORMA QUE DEROGA EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VOTOS A FAVOR: 16 VOTOS EN CONTRA: 4 ABSTENCIONES: 0
EN LO PARTICULAR: _____

UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN NÚMERO 02 DE LA COMISIÓN DE LA DIVERSIDAD. LEÍDO POR EL DIPUTADO JAIME EDUARDO CANTÓN ROCHA.

DADO EN EL EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE XXV LEGISLATURA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

PRESIDENTE

María Yolanda

SECRETARIA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA XXV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA XXV LEGISLATURA

RECIBIDO 08 OCT 2026 DIRECCIÓN DE PROCESOS PARLAMENTARIOS

APROBADO EN VOTACION NOMINAL CON
16 VOTOS A FAVOR
0 VOTOS EN CONTRA
0 ABSTENCIONES
COMISIÓN DE LA DIVERSIDAD

DICTAMEN No. 02 DE LA COMISIÓN DE LA DIVERSIDAD, RESPECTO A LA INICIATIVA QUE DEROGA EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de la diversidad le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa que deroga el artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja California, presentada por la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende y por el Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción XXIV, 57 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolla sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado **"Fundamento"** se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado denominado **"Antecedentes Legislativos"** se da cuenta del trámite recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

III. El apartado denominado **"Contenido de la Reforma"** se compone de dos capítulos, el primero denominado **"Exposición de motivos"** en el que se hace una transcripción de los motivos, fundamentos y razones que impulsaron a la legisladora. Por su parte el capítulo denominado **"Cuadro Comparativo"** se presenta de manera esquemática el articulado propuesto.

IV. En el apartado denominado **"Análisis de constitucionalidad"** se realiza un estudio de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y necesidad.

V. En el apartado de **"Consideraciones y fundamentos"** los integrantes de este órgano colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el sentido del presente dictamen.

VI. En el apartado de **"Propuestas de modificación"** se describen las adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al resolutivo.

VII. En el apartado de **"Régimen Transitorio"** se describen las disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al resolutivo.

VIII. En el apartado denominado **"Impacto Regulatorio"** se enuncian los ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen.

IX. En el apartado denominado **"Resolutivo"** se vierte el sentido orientador del presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión.

I. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción XXIV, 60, 122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de la Diversidad, es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se abocó al análisis discusión y valoración de las propuestas referidas en el apartado siguiente.

II. Antecedentes Legislativos.

1. En fecha 29 de noviembre de 2024, la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende y el Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, integrantes del Grupo Parlamentario de **Morena**, presentaron ante Oficialía de Partes de esta H. XXV Legislatura del Estado de Baja California, Iniciativa que deroga el artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja California.

2. Presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 50 fracción II inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la misma para su trámite legislativo. Remitiendo la iniciativa a la Comisión de la Diversidad en fecha 20 de diciembre de 2024.

3. Mediante oficio número de fecha 21 de mayo de 2025, y recibido en esta Dirección de Consultoría Legislativa en la misma fecha, el Presidente de la Comisión de la Diversidad remitió la iniciativa antes mencionada, solicitando la elaboración del proyecto de dictamen correspondiente.

4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.

III. Contenido de la Reforma.

A. Exposición de motivos.

Señala la inicialista en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y argumentos para motivar su propuesta:

1. Planteamiento del problema

   El estigma relacionado con enfermedades venéreas u otras enfermedades graves en periodo infectante incluida recientemente el COVID ha sido constante a lo largo de la historia, la discriminación y criminalización lesionan la dignidad humana de las personas que padecen este tipo de enfermedades.

   Diversas entidades federativas cuentan en sus códigos penales con leyes punitivas que criminalizan a las personas que padecen estas afecciones, esto interfiere con las políticas de prevención las cuales deberían de prevalecer, por sobre la criminalización.

   Privar de la libertad a las personas por su condición de salud atenta en contra de su derecho a la igualdad jurídica, el derecho a la no discriminación, los derechos sexuales y

reproductivos, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la atención médica de calidad, oportuna, segura y eficaz.

En este sentido la criminalización del VIH es un fenómeno que se utilizó para promulgar leyes que castigan la conducta de las personas que se sospecha pueden transmitir el VIH y cuya aplicación se dirige específicamente a esta población y los sitúa en un estatus de predisposición delincuencial. El prejuicio ha contribuido al ejercicio de la discriminación y a la violación de los derechos humanos así como la protección de la salud de quienes viven esta condición; es decir, el prejuicio, el estigma y la discriminación han acompañado al VIH y al SIDA.

Las leyes punitivas son una barrera para la prevención, detección y tratamiento, ya que disuaden a las personas a acudir a los servicios de salud por temor al castigo. El miedo a perder uno de los derechos humanos más importantes como lo es la libertad, inhiben el fin buscado por el propio enunciado establecido en el artículo 160 el Código Penal, el miedo al castigo hace que las personas que viven con VIH, no accedan a pruebas, tratamiento, atención y servicios de apoyo lo que aumentan su grado de vulnerabilidad. La penalización mediante el delito de "Peligro de riesgo de contagio" vulnera más derechos de los que pretende tutelar.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovió en 2015 la acción de constitucionalidad 139/2015[1], respecto del tipo penal de peligro de contagio, previsto en el artículo 158 del Código Penal del Estado de Veracruz, argumentando la violación a los derechos de no discriminación, igualdad, libertad personal y al principio pro persona; en dicha acción promovida destacó que resulta innecesario referir, en el tipo penal, las infecciones por transmisión sexual, ya que hace una distinción entre las personas con enfermedades graves y las que tienen enfermedades de transmisión sexual, en ese sentido, se configura como un acto de discriminación, pues no todas las enfermedades de trasmisión sexual se consideran graves y en este supuesto las encasilla como tales.

La CNDH señaló que dicha disposición atenta contra el derecho a la salud, en virtud de que no atiende el tema de salud pública propiamente sino qué versa sobre cuestiones relativas a enfermedades de transmisión sexual y las criminaliza.

Respecto a esta acción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), identificó que varias entidades federativas del país, cuentan con una modalidad que penalizan la transmisión dolosa de alguna enfermedad grave y entre la redacción incluyen enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, enfermedades venéreas e incluso la especificación de la transmisión del VIH/SIDA.

En el análisis que hace respecto del concepto de invalidez, recalcó que criminalizar estas conductas, podría servir para prevenir una de las múltiples causas de la propagación de estas enfermedades, sin embargo, sólo ataca un factor muy pequeño, respecto de la propagación, por lo que, hay otras medidas menos gravosas y que resultan más efectivas, como campañas de información, la promoción del uso del condón e información sobre prácticas sexuales seguras.

La SCJN también tomó en cuenta el trabajo que ha realizado la ONU a través del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, el cual consiste en difundir una política de no criminalización, pues consideran que esto trae como consecuencia la marginalización de colectivos, permitiendo al estado penalizar de forma selectiva en contra de grupos vulnerables.

Y en virtud de lo anterior, la SCJN consideró que la CNDH fundamentó debidamente el concepto de invalidez, respecto de la vulneración al derecho a la libertad personal y, por lo tanto, decidió invalidar la porción normativa de infecciones de transmisión sexual u otras del artículo 158 del Código Penal de Veracruz.

En el mismo sentido, la Acción de Inconstitucionalidad 189/2020 (CNDH, 2020)[2], donde se reclama la inconstitucionalidad del artículo 337 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León, adicionado mediante decreto número 320, publicado en el periódico oficial del Estado, en fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, la SCJN señaló "[...] es cierto que los objetivos de salud pública pueden justificar la injerencia en las libertades personales, sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que la penalización no contribuye a lograr los objetivos de salud pública, sino que, por el contrario, a menudo puede resultar contraproducente".

La SCJN mencionó que, es responsabilidad del Estado proporcionar bienes, servicios y educación en materia de salud, por lo cual, el régimen penal busca eximir a las

autoridades de la misma, castigando a las personas por la incapacidad de las autoridades de ofrecer la atención médica integral y adecuada y llevar a cabo una concientización a la población en general sobre los problemas de salud pública y cómo evitarlos.

En este sentido, es inaceptable que el derecho penal pretenda castigar a las personas por la inoperancia del gobierno respecto a la responsabilidad del Estado de brindar educación, servicios de salud y mensajes coherentes a la población sobre la prevención ante una situación de posibles contagios de enfermedades transmisibles.

Por otra parte, la penalización por peligro de contagio, lesiona el libre desarrollo de las personas que, en una relación sexual tienen igual compromiso ambas partes de cuidar su salud sexual y reproductiva, castigando solamente a una de las partes.

En este punto debemos considerar los artículos 2, 5 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[3] que obliga a los Estados a respetar y garantizar a todos los individuos las medidas necesarias para dictar las disposiciones legislativas para hacer efectivos los derechos del pacto así como adoptar medidas para la prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y a crear condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad.

A propósito de lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 1, 2 y 24, señala que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades de toda personas, y si esto no estuviese garantizado por las disposiciones legislativas, harán lo necesario para hacer efectivos dichos derechos y establece que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, tienen derecho a la protección de la ley sin discriminación alguna.

En relación a lo anterior, la Declaración de compromisos en la lucha contra VIH/SIDA de las Naciones Unidas del cual el Estado Mexicano es parte, en el párrafo 59, se comprometieron a:

> 59. Para 2003, promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según proceda, leyes, reglamentos y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA y los miembros de grupos vulnerables, y asegurarles el pleno

> disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles acceso a, entre otras cosas, educación, derechon de sucesión, empleo, atención de la salud, servicios sociales y de salud, prevención, apoyo, tratamiento, información y protección jurídica, respetando al mismo tiempo su intimidad y la confidencialidad; y elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociados a la epidemia;

Contrario a dichos compromisos, el delito de "Peligro de Contagio", contribuye y fomenta el estigma que impacta de manera particular a aquellas personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), lo que a su vez ocasiona reacciones negativas que afectan la dignidad humana de las personas que viven con dicha condición, como puede ser el aislamiento, la segregación y la depresión.

Uno de los principales problemas relativos al delito de "peligro de contagio" radica en ambigüedad y falta de claridad en su tipificación pues la conducta no exige que se concrete la transmisión o que se genere un daño o lesión, pues basta con que la persona portadora exponga a otra a la posibilidad de ser contagiada para que sea punible, dando cabida a que sea la autoridad jurisdiccional quien tenga que determinar cuáles enfermedades se pueden considerar como graves y qué conductas pueden ser sancionadas.

Las penas impuestas por el peligro de contagio se basan en el "riesgo de generar daño", no en el daño en sí mismo, sobredimensionando la carga de responsabilidad sobre las personas con alguna infeccion o enfermedad de transmisión sexual, o en condición de inmunodeficiencia, dejando sin ninguna responsabilidad respecto a la protección de la salud que tiene la otra persona involucrada de tener relaciones sexuales con o sin protección, lo que pone al portador en situación de desigualdad, se le niega la posibilidad de acceso a la justicia y discrimina al portador de alguna ITS.

Actualmente la Ciudad de México (CDMX), Aguascalientes, Tabasco, San Luis Potosí, Nayarit y Colima han derogado el delito de "Peligro de Contagio" y se han presentado iniciativa en la Cámara de Diputados para derogar del Código Penal Federal el artículo 199 Bis que prevé este delito.

Al respecto, la Secretaría de Salud[4], celebró la reforma en CDMX para descriminalizar infecciones de trasmisión sexual:

"El pasado 8 de enero, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para derogar el delito de "peligro de contagio" previsto en el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal (Ciudad de México), con el propósito de eliminar la criminalización de las personas con infecciones de transmisión sexual (ITS).

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), celebra este histórico paso para descriminalizar a las personas con ITS como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lo que marca un hito en la lucha por la justicia y la igualdad, y representa un avance en la eliminación de estigmas arraigados, al tiempo que contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva."

En relación al punto anterior, la Secretaría de Salud del Estado a través del Departamento de Medicina Preventiva, emitió el oficio SGS-DSP-MP-VIH-007122-2024 (ARMENTA, 2024), de fecha 24 de octubre 2024, en el cual se señalan varios razonamientos por los cuales está en favor de derogar dicho artículo; de entre los cuales se transcriben los siguientes:

"En el caso del VIH, las personas que cuentan con este diagnóstico en nuestro país cuentan con la atención médica y el acceso al medicamento antirretroviral (ARV) de manera gratuita con cargo a los servicios públicos de salud. Mediante estos medicamentos, las personas con VIH alcanzan en promedio en menos de seis meses la indetectibilidad, esto es, una concentración tan baja del virus en su sangre, que les permite recuperar su sistema inmunológico, e impedir el avance de la infección, para gozar de un estado de salud, calidad y expectativa de vida semejante al de una personas sin VIH. Adicionalmente esta condición de indetectabilidad de la carga viral hace imposible que este virus se trasmita por medio de las relaciones sexuales, aun en ausencia del uso de mecanismos de barrera como el condón. Esto está confirmado por varias investigaciones científicas, en particular el estudio denominado Parther II presentado en la Conferencia Mundial de sida de la International Aids Society en Ámsterdam, Reino de los Países Bajos en 2018.

Por esta razón, con base en este criterio técnico científico, no existe motivo para que esté disposición normativa se use para imputa a personas con diagnóstico de VIH, con este delito. En los hechos, de acuerdo a estudios hechos por académicos y miembros de la sociedad civil, como la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, hay decenas de casos de personas con VIH procesadas e incluso sentenciadas por este tipo penal, por lo que no se trata de una figura jurídica en desuso en la práctica. Estos

hechos constituyen un acto de discriminación y una injusticia, ya que, como se explicó anteriormente, no hay ninguna razón para presumir que una persona con VIH, en tratamiento ARV ponga en ningún riesgos a otra persona por sostener relaciones sexuales con ella. La pandemia del sida persiste por las personas que viven con VIH y aún no cuentan con un diagnóstico ni un tratamiento, por lo que pueden tener cargas virales altas y, potencialmente, tendrían la capacidad de transmitirlo. A esas personas es necesario acercar la posibilidad de realizarse una prueba de vincularse al tratamiento ARV".

Por otra parte la ONU, ha instado a los gobiernos "a limitar la penalización a los casos de transmisión intensionada, por ejemplo, cuando una persona conoce su estados serológico positivo con respecto al VIH[5], actúa con intención de transmitirlo o, efectivamente, lo transmite". Al respecto, vale la pena argumentar la dificultad que representa en términos reales poder comprobar la existencia de una intención o dolo previo a la realización del contagio, dado que las manifestaciones clínicas de esta infección no suelen ser perceptibles al momento del contacto sexual, generando una imposibilidad de enjuiciar a las personas cuya corresponsabilidad no fue asumida al momento de tener relaciones sexuales.

En este sentido, la Declaración de OSLO sobre la Criminalización del VIH (OSLO, 2012)[6], suscrita por diversas organizaciones civiles de todo el mundo, refiere al uso inadecuado y excesivamente extendido de la ley penal para regular y castigar a las personas que viven con VIH por comportamientos que en cualquier otro caso serían considerados lícitos y, recomiendan a los Estados a emplear un enfoque de prevención, no punitivo, con mejor conocimiento y comprensión de la condición de vida de las personas que viven con esta condición para no lesionar su dignidad humana.

De acuerdo con la Red Mexicana de Organizaciones en Contra de la Criminalización del VIH (CNDH, 2017)[7], el fenómeno de la criminalización "[...] se usa para promulgar leyes que castigan la conducta de las personas que se sospecha pueden trasmitir el VIH. Es impostergable combatir y erradicar el mensaje discriminatorio que hoy en día se trasmite, donde parece que tener VIH es en sí mismo un delito".

Es necesario erradicar las sanciones penales contra las personas que viven con VIH y otras ITS, contribuyendo con ello a combatir la discriminación. El delito de peligro de contagio

estigmatiza la sexualidad y es contrario a la dignidad humana de las personas que viven con VIH, y a su libertad de mantener relaciones sociales y sexuales que elijan.

Existen Instrumentos de protección de derechos jurídicos como la Declaración de Oslo sobre la criminalización del VIH que protegen derechos humanos y las libertades básicas de las personas que viven con infecciones y enfermedades de trasmisión sexual. Por su parte la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han emitido opiniones en contra de la criminalización de las personas que padecen alguna ITS, y estas pueden ser usadas para guiar la formulación o revisión de las políticas, planes o programas, así como la promulgación de legislación pertinente.

Los instrumentos de protección de derechos humanos, de carácter vinculante, y los instrumentos que fungen como principios, estándares y lineamientos técnicos orientadores del sistema de las Naciones Unidas analizados son los siguientes:

Las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos (1997; revisadas en 2006). Estas ofrecen orientación de políticas a los gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, grupos de la sociedad civil y otros en el desarrollo e implementación de estrategias nacionales que adecuadamente tratan temas planteados por el VIH/sida.[8]:

> Los Estados deberían reexaminar y reformar las leyes penales y los sistemas penitenciarios para que concuerden con las obligaciones internacionales de derechos humanos y que no se apliquen indebidamente en el contexto del VIH ni se utilicen contra las poblaciones clave de mayor riesgo.

Los estados parte tienen la obligación de hacer que las leyes penales y sistemas penitenciarios no se apliquen de forma arbitraria a las personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.

A este respecto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2000) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión de Derechos Humanos, que monitorea el pacto, en su vigésima segunda sesión, dejó claro que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental que se pueda

lograr (conocido como el "derecho a la salud") incluía acceso, entre otras cosas, al tratamiento para VIH y educación relacionada, el párrafo 18 llama a "[...] la no discriminación y a la igualdad de tratamiento en acceso a la atención medica sin importar el estado de salud "incluido el VIH/sida".

En el mismo sentido, la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA (ONU, 2006)[9], todos los países miembros de la ONU se comprometieron a incrementar su respuesta al VIH/SIDA, dentro de un marco de derechos humanos. La Declaración establece objetivos concretos con fechas para la introducción de legislación nacional y medidas relacionadas para asegurar el respeto de los derechos humanos en las áreas de prevención, apoyo, tratamiento, información y protección legal.

La Protección de los Derechos Humanos en el Contexto del VIH y el SIDA (2005)[10]. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU pide a los gobiernos que aseguren que las leyes, políticas y prácticas, incluidas las relacionadas con el lugar de trabajo, respeten los derechos humanos dentro del contexto de VIH/SIDA y prohíban la discriminación relacionada con VIH/sida. Se pide además a los Estados que desarrollen, apoyen y fortalezcan instituciones nacionales de derechos humanos y otros organismos profesionales que monitoreen y hagan cumplir los derechos humanos relacionados con el VIH, que eliminen el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. Se exhorta además a los Estados a tomar las medidas adecuadas para proteger los derechos humanos de mujeres y niños dentro del contexto de VIH/sida, en particular, a abordar la desigualdad de género y la violencia contra mujeres y niñas, y a satisfacer las necesidades legales y sociales de los niños que han quedado huérfanos o en situación vulnerable debido al VIH/SIDA y las necesidades de los que cuidan de ellos.

No obstante, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido recomendaciones en las que solicita a los Estados evitar legislar al respecto, aunque ha reconocido la posibilidad de que los Estados penalicen aquellos casos en que la transmisión es dolosa, siempre y cuando estén basados en los principios de proporcionalidad, previsibilidad, motivación, causalidad y no discriminación.

También, la Declaración de Oslo sobre la Criminalización del VIH, suscrita por personas expertas y diversas organizaciones de la sociedad civil, recomienda a los Estados emplear un enfoque preventivo y no punitivo con un mejor conocimiento y comprensión del VIH.

En la declaración se señala que:

> Las leyes penales existentes relacionadas con el VIH deberán ser revocadas de acuerdo a las recomendaciones de ONUSIDA. En el caso de que, luego de una meticulosa revisión a nivel nacional basada en la evidencia, se estimara que los procesos judiciales relacionados con el VIH fueran necesarios, los mismos deberán basarse en principios de proporcionalidad, previsibilidad, motivación, causalidad y no discriminación; estar Informados por los avances científicos y médicos más actualizados; basarse en el daño y no en el riesgo de daño; y ser consistentes tanto con los objetivos de salud pública como con las obligaciones internacionales en el área de derechos humanos.

De igual forma en la declaración se señala que:

> Las leyes penales no cambian el comportamiento enraizado en cuestiones sociales complejas, especialmente el comportamiento basado en el deseo y que sufre el impacto del estigma asociado al VIH. Ese comportamiento se cambia asesorando y apoyando a las personas que viven con VIH con el objetivo de lograr salud, dignidad y empoderamiento.

Ahora bien, interpretando el artículo primero, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que queda prohibida la discriminación, entre otras razones, motivada por las condiciones de salud, por lo la tipificación del delito de contagio es un ejemplo de cómo, desde la materia penal, se buscaba regular la salud pública y la salud sexual al señalar a una persona responsable de la comisión de un delito y criminalizarla por vivir o tener una enfermedad de transmisión sexual atenta contra el derecho a la no discriminación.

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la Acción de Inconstitucionalidad 189/2020[11] (CNDH, 2020), promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la invalidez del artículo 337 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León, sobre el delito de Peligro de contagio; y estableció que contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el principio de ultima ratio, entre otros, mismos que a continuación se transcriben:

a) Principio de Taxatividad penal

• La disposición impugnada transgrede el derecho a la seguridad jurídica y los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad, pues algunos de los elementos de la descripción de la conducta no son claros, precisos o están acotados y definidos correctamente, lo que genera incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma.

• El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se hacen extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley.

• El derecho penal no es la vía mas idónea para salvaguardar la puesta en Peligro del derecho a la salud, ya que no se produce un ataque grave o un daño relevante a este bien jurídico tutelado con la comisión de la conducta
tipificada.

• La falta de claridad del delito de peligro de contagio se da por la vaguedad de los elementos siguientes:

- Los alcances del verbo rector relativo a que se "ponga la salud de otro en
peligro de contagio".

- Lo que se ha de entender por "enfermedad grave y transmisible", "incurable" o "daño grave permanente".

- La forma o medio de transmisión, pues no se dice algo al respecto.

b) Principio de mínima intervención en materia penal (ultima ratio)

• El artículo cuestionado vulnera el principio de ultima ratio que rige el derecho penal, ya que la tipificación de la conducta permite que se imponga la pena de prisión respecto de hechos jurídicos que producen consecuencias poco o nulamente lesivas al bien jurídico que se pretende proteger.

• Si bien la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de las personas es válida constitucionalmente, lo cierto es que el hecho de poner en peligro de contagio una enfermedad transmisible no conlleva necesariamente que se cause un daño grave e importante que amerite la pena de prisión.

• A la luz del principio de subsidiariedad, el Estado debe recurrir en primera Instancia a otras medidas menos gravosas y lesivas del derecho a la libertad personal para proteger el bien jurídico de la salud frente a eventuales riesgos, sin embargo, en el presente caso se permite sancionar a las personas con la pena más severa y restrictiva.

El tipo penal impugnado criminaliza conductas que no deberían de ser sancionadas por el ius puniendi del Estado, al no ser hechos jurídicos que produzcan un resultado real y dañoso a la salud pública, sino una mera posibilidad, de ahí que se incumpla con el subprincipio de fragmentariedad.

• La disposición combatida vulnera los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad al criminalizar su condición de salud.

En relación con los argumentos establecidos por la SCJN, nos encontramos ante la contravención del principio de consunción establecido en el artículo 10 del código objeto de reforma, lo anterior se afirma así ya que el capítulo VI Lesiones, artículo 139 fracción III, se prevé las lesiones en razón del resultado y contempla aquellas que causen una enfermedad segura o probablemente incurable; con lo que se tutela la vida y salud de las personas, mismo objeto de tutela del artículo 160, por lo que en virtud de que el código sea más preciso y no vulnere la dignidad de las personas que viven con alguna ETS o VIH/SIDA se pide su derogación:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

ARTÍCULO 139.- Punibilidad de las lesiones simples en razón del resultado.- Las lesiones que no pongan en peligro la vida, cualquiera que sea su tiempo de curación, serán penadas:

I (...)

II. (...)

III.- De tres a ocho años de prisión y hasta doscientos días multa si producen la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro órgano o facultad, o **causen una enfermedad segura o probablemente incurable** o deformidad incorregible, o incapacidad por más de un año o permanente para trabajar

ARTÍCULO 160.- Peligro de contagio de salud.- El que ha sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, o violando un deber de cuidado, será sancionado de uno a cuatro años de prisión y de diez a cincuenta días multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de cinco a nueve años de prisión. En ambos casos se impondrá tratamiento curativo obligatorio en institución adecuada.

Cuando se trate de cónyuges, concubina o concubinario sólo podrá procederse por querella del sujeto pasivo.

Las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Jalisco y Tabasco, prevén dentro del delito de lesiones la conducta típica de "*causar una enfermedad incurable*" tal como se aprecia a continuación:

Aguascalientes

ARTÍCULO 104- Lesiones dolosas. (...)

Al responsable de Lesiones Dolosas se le aplicaran:

I.alll. ...

V. De 2a 8 años de prisión y de 30 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los danos y perjuicios ocasionados, si (...) le causan una enfermedad incurable

o (...).

VI. ...

ARTICULO 197 - Lesiones culposas (...)

Al responsable de Lesiones Culposas se le aplicaran:

I. ...

II. De 2 a 7 años de prisión, de 25 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los danos y perjuicios ocasionados y privación de 1 a 2 años para ejercer profesión u oficio, si (...) o le causan una enfermedad incurable (...).

Jalisco

Artículo 207. Al responsable del delito de lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán:

I. a IV. ...

V De dos a ocho años de prisión, cuando las lesiones produzcan la perdida de **cualquier función orgánica o de un miembro, de un ojo, o causen una Enfermedad probablemente incurable, (...)**

VI. a VII. ...

Articulo 219. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados:

I. a VI. ...

VII. Cuando se causen (...), contagio intencional, (...)

Tabasco

Artículo 116. Al que cause a otro un daño en su salud se le impondrán:

I. a V. ...

VI. De cinco a diez años de prisión, cuando las lesiones (...) causen una

Enfermedad incurable, (...)

VII. ...

Articulo 120. Al que padeciendo una enfermedad grave y transmisible, realice **actos mediante los cuales contagie a una persona, se le aplicara la pena que corresponda conforme a los Artículos 116 y 117.**

Es de tomar en consideración que las mencionadas entidades federativas eliminaron recientemente el delito de peligro de contagio; Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Colima.

De la revisión de los tipos penales previstos en los diversos ordenamientos penales en el Estado mexicano, se aprecia que el principal problema de la tipificación del delito de delito de contagio o peligro de contagio, resulta ser la ambigüedad de la definición de las

conductas señaladas como delito; por lo que queda en el ámbito discrecional de la autoridad jurisdiccional decidir qué enfermedades se consideran graves o qué conductas son punibles. Además, cabe la interpretación de que el peligro de contagio no requiere específicamente generar un daño, lesión o la transmisión de la enfermedad, aunado a que el tipo penal no responde a las necesidades sociales actuales.

Toda vez que al tratarse de una conducta típica ambigua y discriminativa, resulta necesario derogar la disposición que la contempla, dejando en el ámbito de la comisión del delito de lesiones la oportunidad de la autoridad investigadora para realizar su persecución, sin que ello genere una distinción innecesaria.

Algunos de los argumentos más fuerte a favor de la derogación de este delito, que tienen sustento en tratados internacionales y en los criterios de la Suprema Corte, son que:

1- Toda persona debe ser responsable de su seguridad sexual;

2.- Quitar la punibilidad será motivo confiable para que las personas puedan acercarse a solicitar servicios de salud; y,

3.- Todo esto bajaría las estadísticas de contagios, y aumentaría el número de personas indetectables.

1. Marco Jurídico

1.1. Marco normativo Constitucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en su artículo 1º, el derecho a la igualdad, que prohíbe la discriminación motivada, entre otras, por las condiciones de salud, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

En el mismo sentido garantiza a todas las personas el libre desarrollo de la personalidad mediante la autonomía de la voluntad y garantiza la progresión de derechos.

El artículo 1 también reconoce los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad, Progresividad; además todas las personas gozarán de la protección de las garantías individuales y obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias.

En este sentido el artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, siendo que en nuestro país, por mandato constitucional, el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos y los prejuicios.

Además el artículo 4 garantiza el derecho a la salud, y establece la obligación del estado de establecer políticas públicas que den a conocer la prevención de enfermedades.

En este sentido la CPEUM garantiza la seguridad jurídica contemplada en el artículo 14 y 16, así como el principio de legalidad artículo 21 en su vertiente de taxatividad, así como el principio de mínima intervención del derecho penal.

1.2. Marco normativo local

Por lo que hace al marco normativo local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos.

2. Aspectos sociales

El delito de "*peligro de contagio*" nació en Veracruz y actualmente es reconocido en varias entidades del país sin embargo recientemente se ha derogado en varios estados[1] (EMEEQUIS, 2022).

Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del COPRED de CDMX, expusó que este delito se creó para controlar enfermedades de transmisión sexual en el Código Penal Federal en los años 80´s. Explicó que, aunque no lo menciona directamente, este artículo estigmatiza a personas infectadas de VIH y pone en estado de vulnerabilidad a quienes viven con esta condición. Es tal el riesgo que este delito representa que, tal como ejemplifica la presidenta de la Copred, "*[...] en el caso de homicidio necesitas un muerto para ser acusado; en peligro de contagio no se necesita nada: con el simple hecho de tener una relación sexual sin mencionar la condición, estás en riesgo de ser denunciado*".

Tal es el caso de Francisco Zenil, "*Paco*", como le llaman sus personas de confianza, fue arrestado el 31 de mayo de 2021 por la policía de investigación de la CDMX, aquel día, el joven de 32 años, iba llegando a su tienda en el sur de la ciudad cuando fue interceptado

[1] https://m-x.com.mx/investigaciones/peligro-de-contagio-el-delito-que-revivio-con-la-pandemia-y-criminaliza-a-personas-con-vih/

por tres policías y un comandante, quienes le mostraron una hoja que ni siquiera pudo leer, le dijeron "[...] *te pasaste de verga, te pasaste de cabrón, tú sabes lo que le hiciste a Atziri, te vamos a llevar*", y lo subieron a la patrulla.

Paco –abiertamente bisexual– tuvo una relación con una joven por allá del 2019. Pero esta terminó cuando, por accidente, la chica encontró en la recámara de su pareja medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH. En aquel momento, el joven no había confesado su enfermedad a aquella chica por motivos personales. Él estaba siendo atendido en la Clínica Condesa y sus estudios siempre fueron seropositivos; su carga viral no era suficiente para poder contagiar el VIH a su pareja. Aunado a ello, cuenta que siempre utilizó protección sexual.

Pese a esta información, ambos terminaron la relación de forma pacífica; o, eso creía. Pasaron algunos meses y, con sorpresa, Francisco se enteró de que la joven lo había denunciado por el delito de peligro de contagio por el tiempo que pasaron juntos sin saber de la enfermedad y el riesgo que tuvo de contagiarse, aunque la carga viral no era la suficiente. Tiempo después, se sabría que nunca fue infectada.

Paco consiguió salir del Reclusorio el lunes siguiente gracias al apoyo de su equipo legal; no obstante, cuenta sobre su martirio en el lugar: "*Me trataron mal, me señalaron de sidoso y virulento. Dentro del penal, policías y otras personas me discriminaban y señalaban. Todo fue muy fuerte*". El joven, tras varios meses de terapia, ha conseguido sobrellevar la experiencia traumática.

Francisco tuvo algunas audiencias tras su salida del reclusorio, pero desde que la joven denunciante presentó sus pruebas de VIH —que resultaron negativas— dejó de

comparecer ante el juzgado y *"[...] a partir de ahí el proceso ha sido más tranquilo. Gracias a eso y a mi equipo de abogados conseguí un amparo"*, cuenta Paco.

La Copred considera que este delito podría derogarse ya que su función podría ser perfectamente cubierta por el delito de lesión. Según su presidenta: *"[...] no cumple con su función de sancionar a quien quiera contagiar con dolo, para ello existe el delito de lesión. No hace falta esta pena", asegura González de la Vega"*.

3. Propuesta

Es por lo anterior se proponen la siguiente modificación:

- Eliminar el artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja.

(Ofrece cuadro comparativo)

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente *tabla indicativa* que describe de manera concreta la intención de los legisladores:

INICIALISTA	PROPUESTA	OBJETIVO
Diputados Liliana Michel Sánchez Allende y Jaime Eduardo Cantón Rocha.	Derogación del artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja California.	Conlleva la finalidad de eliminar el delito de Peligro de Contagio de Salud.

Cuadro Comparativo.

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TEXTO ACTUAL	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 160.- Peligro de contagio de salud.- El que ha sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, o violando un deber de cuidado, será sancionado de uno a cuatro años de prisión y de diez a cincuenta días multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de cinco a nueve años de prisión. En ambos casos se impondrá tratamiento curativo obligatorio en institución adecuada. Cuando se trate de cónyuges, concubina o concubinario sólo podrá procederse por querella del sujeto pasivo.	**ARTÍCULO 160.-**Deregado.
	TRANSITORIO:

	ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

IV. Análisis de constitucionalidad.

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el marco jurídico constitucional de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que debe imponer la legisladora o el legislador.

2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible.

3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica de las personas que las que resulten indispensables para la consecución de un fin social superior.

4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, se debe vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizar si la construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al cumplimiento del fin trascendente enunciado en la exposición de motivos.

Esta Comisión se abocó al estudio de constitucionalidad del proyecto legislativo que comprende el presente Dictamen.
El punto de partida de este estudio jurídico de constitucionalidad es y debe ser, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, el artículo 39 de la misma señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que este tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

> **Artículo 39.** La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por su parte, el artículo 40 de nuestra norma fundamental, establece que nuestra República representativa está compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

> **Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Siguiendo con nuestro texto supremo, el diverso numeral 41 precisa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por lo de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos en la Constitución Federal y las particulares de cada Estado, sin que en ningún caso se pueda contravenir al Pacto Federal.

> **Artículo 41.** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
>
> (...)

Tampoco se puede perder de vista que, el artículo 43 de la Constitución Federal establece con toda claridad que Baja California, es parte integrante de la Federación:

> **Artículo 43.** Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.

De este modo, el artículo 116 de nuestra Constitución Federal señala que el poder público de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que los poderes de los Estados se organizan conforme a la Constitución de cada uno de ellos con sujeción a las directrices que establece la Carta Magna.

> **Artículo 116.** El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
>
> Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas;
>
> (...)

Así, el artículo 4 de la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California señala con toda puntualidad que Baja California es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Federal, mientras que el precepto subsecuente (artículo 5) establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

> **ARTÍCULO 4.-** El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
>
> **ARTÍCULO 5.-** Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

En orden de lo anterior, el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de Baja California establece que el Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.

> **ARTÍCULO 11.-** La forma de Gobierno del Estado es republicana, representativa, democrática, laica y popular.
>
> El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.

En atención a la facultad jurídica-constitucional de la inicialista para legislar en esta materia, en lo que hace al derecho humano de no discriminación y protección de la salud, se consagran en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal:

> **Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...
>
> (...)
>
> Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
>
> **ARTÍCULO 4o.-** (...)
>
> (...)
>
> Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
>
> (...)

Así mismo, la Constitución local le faculta a la inicialista para legislar en la materia, tal y como se aprecia a continuación:

> **ARTÍCULO 27.-** Son facultades del Congreso:

I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos;
(...)

En la misma intelección, el artículo 7, apartado A, párrafo diecisiete de la constitución local mandata que es derecho de los habitantes del Estado la protcción a la salud:

ARTÍCULO 7.- Son derechos de las y los habitantes del Estado:

(...)

APARTADO A. De la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos.

(...)

Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, a la cultura física, a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo, a la salud, el derecho a la igualdad y a la no discriminación; la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión; a recibir educación pública, obligatoria y gratuita que imparta el Estado, en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los Derechos Humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Las autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se asegure el disfrute de estos derechos.

Analizado lo anterior, esta Comisión advierte de manera clara que la propuesta legislativa motivo del presente estudio tiene bases y soportes constitucionales previsto en los artículos 1, 4, 39, 40, 41, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los dispositivos 4, 5, 7, 8 y 11 de la Constitución Política local, por lo que el análisis de fondo respecto a la viabilidad de la propuesta legislativa será atendido en el apartado siguiente.

V. Consideraciones y fundamentos.

Esta comisión considera jurídicamente procedente la reforma planteada por los inicialistas en virtud de los siguientes razonamientos jurídicos:

1. Las diputaciones inicialistas Liliana Michel Sánchez Allende y Jaime Eduardo Cantón Rocha, presentaron iniciativa de reforma para derogar el artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja California. Esta iniciativa busca eliminar el delito de "Peligro de Contagio de Salud".

Las razones principales que detalló la inicialista en su exposición de motivos que desde su óptica justifican el cambio legislativo son las siguientes:

- **Estigma y Discriminación:** El estigma relacionado con enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades graves ha existido a lo largo de la historia, y la criminalización de estas afecciones lesiona la dignidad humana de quienes las padecen.

- **Contravención de Derechos Humanos:** Privar de la libertad a las personas por su condición de salud atenta contra su derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la protección de la salud y a la atención médica de calidad. La penalización mediante el delito de "Peligro de riesgo de contagio" vulnera más derechos de los que pretende tutelar.

- **Barrera para la Salud Pública:** Las leyes punitivas son una barrera para la prevención, detección y tratamiento de enfermedades, ya que disuaden a las personas de acudir a los servicios de salud por temor al castigo. El miedo a perder la libertad inhibe el fin buscado por el propio artículo 160 del Código Penal, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas.

- **Principios de Taxatividad y *Ultima Ratio***: El delito es ambiguo y carece de claridad en su tipificación. La SCJN ha invalidado tipos penales similares en otros estados al considerar que contravienen el principio de taxatividad, ya que no definen claramente qué es una "enfermedad grave y transmisible". Además, se vulnera el principio de *ultima ratio* o mínima intervención, ya que el derecho penal no es la vía más idónea para proteger la salud, existiendo medidas menos gravosas y más efectivas como las campañas de información.

- **Redundancia con el Delito de Lesiones:** La iniciativa argumenta que el delito de lesiones, en su modalidad de "causar una enfermedad segura o probablemente incurable", ya tutela el mismo bien jurídico que el artículo 160, haciendo innecesaria y discriminatoria una tipificación separada.

- **Criterios de Organismos Internacionales y Jurisprudencia Nacional:** La iniciativa cita la jurisprudencia de la SCJN en las Acciones de Inconstitucionalidad 139/2015 y 189/2020, en las que se invalidaron tipos penales similares en Veracruz y Nuevo León, respectivamente. Además, se hace referencia a las recomendaciones de la ONU, ONUSIDA y la Declaración de Oslo, que instan a los Estados a adoptar un enfoque de prevención y no punitivo.

- **Derecho Comparado:** Se menciona que otras entidades federativas de México, como la Ciudad de México, Aguascalientes, Tabasco, San Luis Potosí, Nayarit y Colima, ya han derogado el delito de "Peligro de Contagio".

Propuesta legislativa que fue hecha en los siguientes términos:

D E C R E T O:

ARTÍCULO ÚNICO: La XXV Legislatura aprueba la reforma que deroga el artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja California., para quedar como sigue:

Artículo 160.- Derogado

TRANSITORIO:

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del "Edificio del Poder Legislativo, Baja California" en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día de su presentación.

2. Esta comisión coincide con el diagnóstico y propuesta de los inicialistas en virtud de que su objetivo central es tutelar, entre otros, los derechos humanos y fundamentales de no discriminación y protección a la salud, los cuales encuentran sus bases y criterios generales debidamente positivizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Esto es, el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

> **Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
>
> (...)

Mientras que, el artículo 4o de la Constitución Federal consagra el derecho humano de protección a la salud:

> Artículo 4o. (...)
>
> (...)
>
> Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Así mismo, como se ha precisado con anterioridad, el artículo 7 de la Constitución local reconoce, al igual que el 3º de la Carta Marga Federal, el derecho humano de no discriminación y protección a la salud.

De lo anterior se colige que, la Constitución Federal reconoce, en su artículo 1°, los derechos humanos para todos los habitantes del país, entre ellos, el de no discriminación, bajo los principios y obligaciones que la misma determina; por su parte, el artículo 4 reconoce el derecho humano a la protección a la salud, en correlación con el artículo 7 de

la Constitución Local que, como se ha dicho antes, consagra también el derecho a la no discriminación y protección a la salud.

En la misma intelección, debemos enfatizar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el estado mexicano es parte desde 1980, pues este instrumento internacional reconoce en su artículo 2, numeral 2, el derecho humano a la no discriminación, así mismo, en su numeral 12, el de protección a la salud, tal como se aprecia a continuación:

Artículo 2

1. (...)

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

De igual manera reviste vital importancia la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), a la cual el estado mexicano se adhirio el 24 de marzo de 1981, pues en su artículo 1 compromete a los Estados a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicciónen; ademásm en su artículo 24, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y, por lo tanto, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley, los siguientes términos:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

En este tenor, del texto constitucional, los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales en cita, resalta la viabilidad de la pretendida reforma al Código Penal para el Estado de Baja California.

Sirve a todo lo anteriormente argumentado la siguiente tesis jurisprudencial

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.

El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).

Tesis: 1a./J. 85/2017 (10a.)	Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	Registro digital: 2015305
Primera Sala	Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I	Pág. 189	Jurisprudencia (Constitucional)

La jurisprudencia en cita, relativa al principio de progresividad de los derechos humanos, se aplica a la iniciativa en turno de la siguiente manera:

Prohibición de Regresividad: El principio prohíbe emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos. La iniciativa argumenta que el delito de "Peligro de

Contagio" es en sí mismo un acto regresivo al criminalizar la condición de salud de las personas.

Deber Positivo de Progresar: Del principio de progresividad deriva para el legislador la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos. La derogación del artículo 160 del Código Penal representa un avance en la protección de los derechos a la no discriminación, a la salud y a la dignidad humana, lo que se considera una acción progresiva.

Coherencia con la Jurisprudencia de la SCJN: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que la criminalización del "Peligro de Contagio" es inconstitucional por violar principios como la taxatividad y la ultima ratio. La iniciativa se alinea con estos criterios, que son una manifestación de la progresividad en la interpretación de los derechos humanos.

Eliminación de la Discriminación: La iniciativa busca eliminar un delito que, desde su óptica, atenta contra la dignidad humana y criminaliza la salud de las personas. La derogación es un acto de progresividad al eliminar una norma que genera estigma, discriminación y vulnerabilidad, lo cual está prohibido por el artículo 1° de la Constitución Federal.

Así mismo, ha servido como sustento para el presente dictamen las siguientes tesis:

> **DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN.**
>
> Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad,

no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud.

Tesis: P. XVI/2011	Semanario Judicial de la Federación	Novena Época	Registro digital: 2017254
Pleno	Tomo XXXIV, Agosto de 2011,	Pág. 29	Aislada (Constitucional, Administrativa)

La tesis aislada en cita, sobre el derecho humano de protección a la salud, se relaciona con la iniciativa de reforma que deroga el artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja California, de la siguiente manera:

Fundamentación en el Derecho a la Salud: La tesis establece que el derecho a la salud, contemplado en el artículo 4° de la Constitución Federal, impone al Estado Mexicano la obligación de garantizar que este derecho sea ejercido sin discriminación alguna. La iniciativa precisamente busca eliminar una disposición legal que, en la práctica, criminaliza y discrimina a las personas por sus condiciones de salud.

Obligación de No Discriminación: La tesis resalta que, a pesar de las limitaciones de recursos, los Estados tienen la obligación inmediata de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación. La derogación del artículo 160 del Código Penal es

una medida legislativa concreta para cumplir con esta obligación, eliminando una norma que es inherentemente discriminatoria.

Principio de Progresividad y Prohibición de Regresividad: La tesis refuerza el principio de progresividad al señalar que existe una fuerte presunción de que las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud no son permisibles. La iniciativa argumenta que el tipo penal de "Peligro de Contagio" es una medida regresiva, y su eliminación sería un acto de progresividad en la protección de los derechos humanos.

Adopción de Medidas para la Plena Realización del Derecho: La tesis indica que el Estado debe adoptar "medidas deliberadas y concretas" para la plena realización del derecho a la salud. La iniciativa, al proponer un cambio legislativo que prioriza un enfoque de salud pública en lugar de uno punitivo, se constituye como una de esas medidas concretas que buscan la plena realización del derecho a la salud de la población.

Armonización con Instrumentos Internacionales: La tesis cita la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, un documento que también es referenciado en la exposición de motivos de la iniciativa. Esto demuestra la coherencia de la iniciativa con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

4. El presente Dictamen cubrió el principio de exhaustividad del estudio, toda vez que fueron analizadas todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas por la inicialista.

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que, el texto propuesto por la inicialista resulta acorde a derecho, no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local, no contravienen el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores jurídicos y axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace a la misma jurídicamente **procedente**, en los términos precisados en el cuerpo del presente Dictamen.

VI. Propuestas de modificación.

Ha quedado debidamente solventado en el considerando III del presente Dictamen.

VII. Régimen Transitorio.

Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio.

VIII. Impacto Regulatorio.

No es necesario armonizar otros ordenamientos legislativos.

IX. Resolutivo.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión de la Diversidad, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se aprueba la reforma que deroga el artículo 160 del Código Penal para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 160.- Derogado.

ARTÍCULO TRANSITORIO

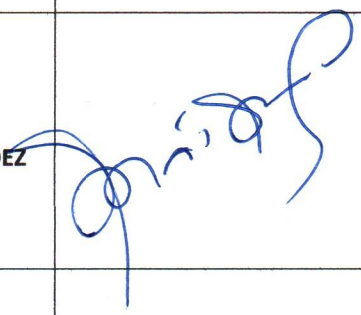
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en sesión de trabajo a los 02 días del mes de octubre de 2025.
"2025, Año del Turismo Sostenible como impulsor del Bienestar Social y Progreso"

COMISIÓN DE COMISIÓN DE LA DIVERSIDAD
DICTAMEN No. 02

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. JAIME EDUARDO CANTÓN ROCHA PRESIDENTE			
DIP. MICHELLE ALEJANDRA TEJEDA MEDINA SECRETARIA			
DIP. JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ VOCAL			
DIP. YOHANA SARAHÍ HINOJOSA GILVAJA VOCAL			

COMISIÓN DE COMISIÓN DE LA DIVERSIDAD
DICTAMEN No. 02

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. DIEGO ALEJANDRO LARA ARREGUI **V O C A L**			
DIP. MARÍA TERESA MÉNDEZ VÉLEZ **V O C A L**			
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA **V O C A L**			
DIP. LILIANA MICHEL SÁNCHEZ ALLENDE **V O C A L**			

DICTAMEN No. 02 CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DEROGACIÓN DELITO DE PELIGRO DE CONTAGIO A LA SALUD.

HICM/IGL/OLVS*